

PGR

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE TRANSPARENCIA
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2018

**Sesión: SEGUNDA
ORDINARIA**

Fecha: 16 DE ENERO DE 2018

Hora: 12:00 horas.

Lugar: Ciudad de México
Dr. Lucio, Del. Cuauhtémoc
Sala de Juntas 1er Piso

ACTA DE SESIÓN

INTEGRANTES

1. **Lcda. Adi Loza Barrera.**
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).
2. **Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.**
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. **Lic. Luis Grijalva Torrero.**
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República. En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).

A las doce horas del martes dieciséis de enero de dos mil dieciocho, en la sala de juntas ubicada en el primer piso del edificio ubicado en Dr. Lucio, Del. Cuauhtémoc, la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia verificó la asistencia de todos los integrantes de ese Órgano Colegiado, habiendo quórum legal suficiente para sesionar.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

I. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

II. Aprobación de Acta de la sesión inmediata anterior.

III. Análisis y resolución de las solicitudes de información:

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio 0001700288617 – RRA 8474/17

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:

B.1. Folio 0001700010118

B.2. Folio 0001700010218

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de los documentos requeridos:

C.1. Folio 0001700327517

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia de los documentos requeridos:

D.1. Folio 1700100338217

D.2. Folio 1700100012717 – Centro de Evaluación de Control y Confianza

E. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

E.1. Folio 0001700333317

E.2. Folio 0001700333417

E.3. Folio 0001700333517

E.4. Folio 0001700334317

E.5. Folio 0001700334517

E.6. Folio 0001700334717

E.7. Folio 0001700335017

F. Análisis a cumplimientos de las resoluciones del INAI:

F.1. Folio 0001700161317 – RRA 5100/17

F.2. Folio 0001700205717 – RRA 5618/17

G. Clasificación de la información de las Obligaciones de Transparencia comunes del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

H. Cambios en la Tabla de Aplicabilidad SIPOT.

I. Asuntos Generales.

[illegible]

ABREVIATURAS

PGR – Procuraduría General de la República.

OP – Oficina del C. Procurador General de la República.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SDHPDSC – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

AIC – Agencia de Investigación Criminal.

OM – Oficialía Mayor.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

FEPADE – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

VG – Visitaduría General.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.

ACUERDOS

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 9 de enero de 2018.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de información para su análisis y determinación:

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio 0001700288617 – RRA 8474/17

Descripción clara de la solicitud de información:

"Pido lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos:

I Sobre los casos totales de desaparición existentes en las bases del Cenapi, a nivel nacional, pido se me informe lo siguiente, por cada caso:

- a) *Fecha de desaparición*
- b) *Entidad federativa donde ocurrió*
- c) *Municipio donde ocurrió*
- d) *Sexo del desaparecido*
- e) *Edad del desaparecido*

II Sobre los casos de desaparición existentes en las bases del Cenapi, a nivel nacional, en la categoría que indica la probable intervención de personas armadas y/o de la comisión de ilícitos, pido se me informe lo siguiente, por cada caso:

- a) *Fecha de desaparición*
- b) *Entidad federativa donde ocurrió*
- c) *Municipio donde ocurrió*
- d) *Sexo del desaparecido*
- e) *Edad del desaparecido" (Sic)*

Antecedentes

Para dar cumplimiento a la presente solicitud, se turnó para su atención inicialmente al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), misma que manifestó no contar con la información requerida, de conformidad con el artículo 141 de la LFTAIP. No se omite mencionar, que de conformidad con el artículo 64 de la Ley en la materia, dicha unidad administrativa no está sujeta a la autoridad del Comité de Transparencia, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa.

Aunado a lo anterior, en respuesta al particular se le informó que los datos estadísticos que solicitó podría encontrarlos en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro del apartado de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED).

No obstante, el peticionario se informó con la respuesta que se le otorgó alegando que esta Procuraduría no dio acceso a ninguno de los puntos solicitados, siendo que la Fiscalía de Jalisco afirmaba que las bases del CENAPI sí contienen dicha variable.

Es por ello que, a efectos de sobreseer el recurso de revisión citado, conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención al CENAPI y en aras de efectuar una búsqueda exhaustiva en todas las unidades administrativas que pudieran contar con lo requerida, se turnó también a la COPLADII.

De esta manera, ese Centro reiteró su respuesta inicialmente otorgada a los puntos 1 y 2 de la solicitud, toda vez que de las facultades con las que cuenta el **CENAPI**, no es posible desprender que a éste le competa recopilar, almacenar, generar o administrar información estadística que reúna las características referidas por el particular, máxime que sus funciones principales únicamente versan, entre otras cosas, definir estrategias que determinen el seguimiento de la delincuencia organizada en el ámbito nacional e internacional, con el fin de que las unidades operativas correspondientes establezcan los medios logísticos y de investigación para su combate y desarticulación, así como dirigir y aprobar la generación de sistemas de procesamiento de información, relativa a la incidencia delictiva geo-referenciada, para apoyar la planeación del combate a la delincuencia; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo A/101/2013 de la Procuraduría General de la República, los artículos 10, fracción XI de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 3, inciso I), fracción I, 12, fracción XXVII y 93 de su Reglamento, así como lo previsto en el Manual de Organización General de la Procuraduría General de la República.

Por lo que indicó que, no consta la necesidad de declarar la inexistencia por parte del CENAPI respecto de la información solicitada por el particular, toda vez que, tal y como ha quedado evidenciado con anterioridad, no se desprende elemento normativo que obligue a dicho Centro para recopilar, almacenar, generar o administrar información estadística que reúna las características referidas por éste mediante los contenidos citados, o bien, que se advierta otro elemento de convicción que apunte a su existencia; de ahí que el argumento vertido por el particular, consistente en que en el CENAPI no le entregó la información de su interés, que atienda el desglose peticionado, carezca de sustento legal.

Asimismo, la **COPLADII** al ser el canal único para el flujo de la información estadística relacionada directamente con las actuaciones de cada uno de los Agentes del Ministerio Público de la Federación en diferentes etapas y demás áreas de adscripción de esta Procuraduría, y que de acuerdo a sus facultades, concentra información de naturaleza estadística, y la cual se encuentra resguardada en Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), indicó que fue posible localizar el total de personas desaparecidas, cuyo desglose radica por entidad federativa, municipio, género, edad, así el año de desaparición,

En tal razón, **la información localizada por la COPLADII, atiende a cabalidad cada uno de los incisos señalados en el punto 1 de su solicitud**; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la LFTAIP, el cual establece que los sujetos obligados deberán

otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.

Finalmente, respecto a la información requerida en el **punto 2** de la solicitud, la COPLADII refirió que la misma resultaba inexistente, toda vez que de la consulta en su base de datos, en específico en el SIIE, **no se desprende rubro alguno que permita obtener dicho desglose**, es decir, de casos de desaparición en la "categoría que indica la probable intervención de personas armadas y/o de la comisión de ilícitos".

PGR/CT/ACDO/0020/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II y 141 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad después de analizar la solicitud, así como, las respuestas de las diversas unidades administrativas, **declara y confirma** la inexistencia de la información con el nivel de desglose que requiere el particular, es decir, lo peticionado en el punto 2 que versa en casos de desaparición en la categoría que indica la probable intervención de personas armadas y/o de la comisión de ilícitos; lo anterior, debido a que como se expuso con anterioridad, la COPLADII, no cuenta en sus bases de datos con ese nivel de disgregación que permita conocer dicho detalle, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 141 de la LFTAIP.

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la clasificación de la información requerida:

B.1. Folio 0001700010117

Contenido de la Solicitud: "(...) Se me informe si existen dentro de sus archivos alguna imputación, averiguación previa, carpeta de investigación, acta circunstanciada o cualquier línea de investigación en la que la suscrita aparezca como probable responsable, indiciada y/o investigada, y/o señalada por alguna persona en averiguación previa y/o carpeta de investigación tendiente a incriminarme..." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0021/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la

importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

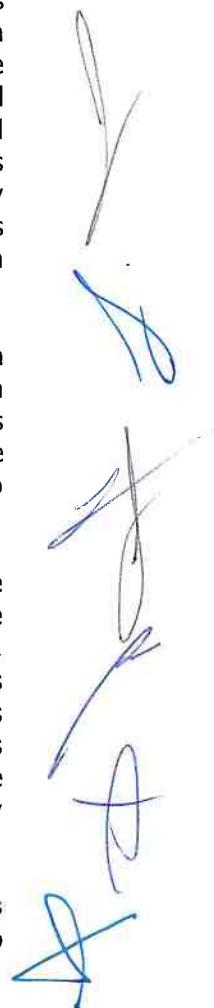
En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No



obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos

sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera

jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.-

B.2. Folio 0001700010217

Contenido de la Solicitud: "(...)"...

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 8º y 20 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos; 13, 17 y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San Jose), demás relativos y aplicables de los ordenamientos legales invocados, solicito me sea fijado día y hora para poder comparecer ante esta Representación Social de la Federación, a efecto de enterarme de la imputación/o imputaciones que obran en mi contra y estar en posibilidad de enfrentarla conforme a Derecho..." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: UTAG.

PGR/CT/ACDO/0021/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la

importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No

obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta.

No obstante lo anterior, resulta conveniente traer a colación lo dictado por los Tribunales Colegiados de Circuito, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales:

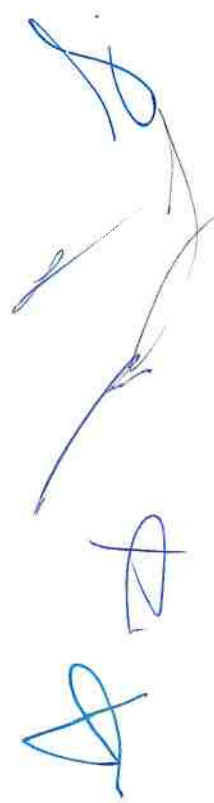
INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA. Amparo en revisión 65/2016 (cuaderno auxiliar 413/2016) del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. 26 de mayo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Guillermo Maldonado Maldonado. Secretaria: Liliana Carmona Vega.

AUDIENCIA DE CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN. CONTRA LA OMISIÓN DE REQUERIR LA PRESENCIA FORMAL Y MATERIAL DEL IMPUTADO PARA SU CELEBRACIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO SER UN ACTO QUE TENGA UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos

sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de sus derechos, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por lo que los actos deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo estrictamente procesal, es decir, que produzcan una afectación material de derechos sustantivos del gobernado. En efecto, los derechos afectados por el acto de autoridad deben revestir la categoría de derechos sustantivos, definición antagónica o contraria a los de naturaleza formal o adjetiva, entendidos éstos como aquellos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, si el acto reclamado es la omisión de requerir la presencia formal y material del imputado para la audiencia de cierre de la investigación complementaria y formulación de acusación, el juicio de amparo indirecto es improcedente conforme a la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el citado artículo 107, fracción V, de la propia ley, al no ser un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias no afectan materialmente ninguno de los derechos fundamentales del quejoso tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 57/2016. 12 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Claudia Carolina Monsiváis de León.

ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. EL DERECHO DEL IMPUTADO A OBTENER COPIA DE LA CARPETA EN LA QUE OBREN LOS REGISTROS DE INVESTIGACIÓN, OPERA A PARTIR DE QUE SEA CONVOCADO A LA AUDIENCIA INICIAL. El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en la etapa de investigación inicial, los registros de voz e imágenes, documentos, objetos o cosas que obren en la carpeta son estrictamente reservados; carácter que dejan de tener, cuando el imputado se encuentre detenido o comparezca a que se le reciba su entrevista; por lo que a partir de ese momento deberá brindarse el acceso a dichos registros. Por su parte, el artículo 219 del propio código dispone que será hasta que el imputado y su defensor sean convocados a la audiencia inicial que tendrán derecho a obtener copia de los registros de investigación. De esta manera, el derecho de acceso a la carpeta de investigación previsto en el artículo 218 referido, no implica que deba brindarse al imputado copia de dichas constancias, pues ese derecho opera a partir de que se le convoca a la audiencia inicial. Sin que lo anterior implique una interpretación restrictiva y retroactiva respecto a los alcances del derecho de defensa adecuada en el sistema de justicia penal acusatorio, sino que se trata del cumplimiento de las pautas que para su ejercicio estableció el legislador en relación con la expedición de copias, en atención a la calidad de la persona imputada y a la etapa en que se encuentre el procedimiento. En efecto, durante la investigación inicial formalmente no se ha imputado a la persona que se investiga; de ahí que su defensa pueda ejercerse adecuadamente con el solo acceso a la carpeta; lo que no ocurre una vez que se le ha llamado a la audiencia inicial, pues dadas las consecuencias que pudieran derivar -dictado de un auto de vinculación a proceso hace necesario que la defensa se ejerza, en caso de así solicitarlo el imputado, con copias de la carpeta de investigación. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera

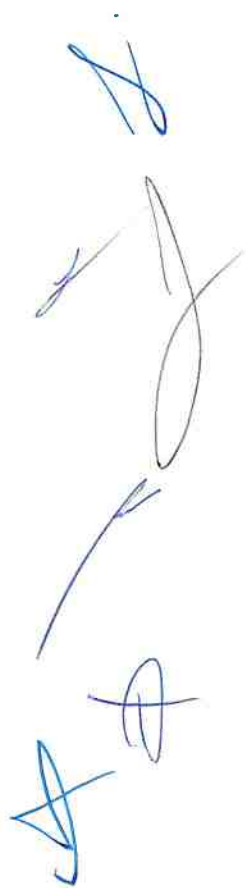


jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querrela contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 99/2017. 18 de mayo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de noviembre de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación.-



C. Solicitudes de acceso a la información que se analiza la versión pública de los documentos requeridos.

C.1. Folio 0001700327517

Contenido de la Solicitud:

"SE SOLICITAN LOS FORMATOS UNICOS DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA OMAR FRANCISCO VILLAGRAN HERNANDEZ; QUIEN LABORO ADSCRITO A LA SUBPROCURADURIA REGIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO, ASI COMO A LA VISTADURIA GENERAL; POR OTRA PARTE SE SOLICITA OFICIO COMISION A LA CORDINACION DE MINISTERIOS PUBLICOS FEDERALES ADSCRITOS ALA SUPREMA CORTE DE JUSTICA DE LA NACION , PARA LA MISMA PERSONA. DENTRO DEL PERIODO 2010 - 2012. SE SOLICITA SE ENVIE POR CORREO ELCTRONICO LOS DOCUMENTOS ESCANEADOS. ESPECIFICANDO EL PERIODO EXACTO DE FUNCIONES EN CADA AREA; ES DECIR FECHA DE INGRESO Y FECHA DE BAJA." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

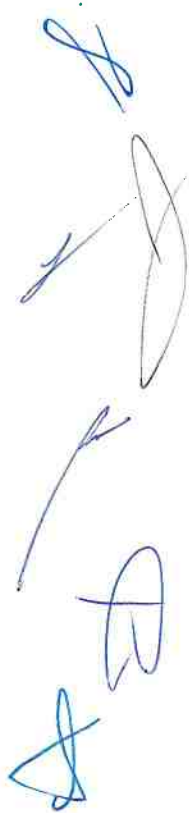
"SE PUEDE LOCLIZAR EN LAS UNIDADES ADMINSTRATIVAS CORRESPONDIENTES, ATRAVES DE LA CORDINACION ADMINSTRATIVA DE AMBAS; O EN RECURSOS HUMANOS DEPENDIENTE D EOFICIALIA MAYOR DE LA PRPPA INSTITUCIÓN" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: VG, SCRPPA y OM.

PGR/CT/ACDO/0022/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la entrega de la versión pública de cinco Formatos Únicos de Personal de la persona citada en la solicitud, testando y clasificando como confidencial los siguientes datos:

- ♦ RFC
- ♦ Homoclave
- ♦ CURP
- ♦ Sexo
- ♦ Edad
- ♦ Estado civil
- ♦ Lugar de nacimiento
- ♦ Nacionalidad
- ♦ Teléfono
- ♦ Domicilio particular

Esos datos, como se refirió con anterioridad, son clasificados como confidenciales de acuerdo al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:



"ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)"

(Énfasis añadido).

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Robustece lo anterior, que de otorgar los datos personales que se están clasificando como confidenciales podría vulnerar la privacidad de la persona referida en la solicitud, toda vez que, podría exponerlo a diversas situaciones, tales como robo, divulgación no autorizada, alteración y modificación de los mismos, y a su vez, exponerlo a las consecuencias que esto conlleva, como daño en la reputación, ser víctima de agresiones psicológicas o discriminación, convertirse en una víctima de robo de identidad para cometer cualquier tipo de fraude, incluso ser víctima de un secuestro, provocar problemas laborales, conflictos con compañeros o jefes, que pueden afectar la integridad de la persona.

Bajo esta consideración, al ser este Sujeto Obligado una Institución dedicada a la prevención y persecución de los delitos, se tiene una mayor responsabilidad y obligación de salvaguardar la información que se posea, en este caso los datos personales de una persona física identificada o identificable.

En ese sentido, una de las maneras de prevenir los delitos es resguardando información que podría caer en manos de la delincuencia, y con ello abusar de dicha información, mediante el robo de identidad por mencionar un ejemplo, o en su caso, causar un perjuicio que afecte a la persona en su calidad de trabajador, por lo que evitar la exhibición de información delicada es la principal medida de protección existente, ya que podría causar la divulgación de opiniones negativas sobre la persona aludida, lo que podría dar lugar a una mala imagen y afectar la reputación de la misma.

Además, toda persona tiene derecho a la protección de sus datos de carácter personal; es decir, tiene derecho a decidir sobre quién tiene sus datos personales y a quien los otorga, siendo en este último caso, que el acceso a la información pública no es la vía para requerir esos datos, sino en todo caso quien podría entregarlos es el titular de los mismos.

Es por ello que, el simple hecho de revelar ciertos datos personales podría provocar una reacción en cadena que traería graves consecuencias como las ya mencionadas; por lo que

clasificar y testar los datos personales de la persona que nos ocupa, es una medida de protección no solo a los datos en sí, sino a la persona física aludida.

D. Solicitudes de acceso a la información que se analiza la incompetencia de la información requerida.

D.1. Folio 1700100338217

Contenido de la Solicitud:

"Solicito me expidan una relacion de las denuncias, clasificadas por año y una breve descripcion de los hechos denunciados, en materia de procuracion de justicia ambiental se han presentado ante el ministerio publico desde el año 2000 hasta el 12 de diciembre de 2017 en el Estado de Quintana Roo.

Es decir denuncias por posibles hechos delictivos tipificados tanto en el codigo penal federal como en el codigo penal del estado de quintana roo, en materia de procuracion de justicia ambiental como por ejemplo delitos contra de la flora y la fauna silvestre, asi como por el quebrantamiento de sellos impuestos por Autoridades Ambientales (PROFEPA, SEMARNAT, SEMA), cuya finalidad es la procuracion y preservacion del medio ambiente.

Me informen cuantas Consignaciones y Averiguaciones previas o carpetas de investigacion se han iniciado en materia de procuracion de justicia ambiental en el periodo del año 2000 al 12 de diciembre de 2017.

Me informe cuantas multas y sentencias en lamisma materia y periodo han existido, igual relacionadas con una breve descripcion de los hechos denunciados

Me informen si existen mecanismos alternativos de justicia ambiental.

Informen cuantos operativos de inspeccion y vigilancia han realizados en los periodos señalados en materia de procuracion de justicia ambiental.

Informen si existen actos, acciones, convenios y demas actividades relativas que se hubieran realizado en coordinacion con instancias federales y que instancias intervinieron en los periodos señalados.

Informe si existe responsabilidad civil por daños al medio ambiente y cual es el sustento legal. Toda la informacion requerida es referente al plazo señalado y especificamente en el Estado de Quintana Roo." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, COPLADII, SEIDF y PFM.

PGR/CT/ACDO/0023/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia por unanimidad, **declara** y **confirma** la incompetencia para proporcionar información respecto de las multas por los hechos que cita el particular y si existe responsabilidad civil por daños al medio ambiente, en virtud de que esta Institución Federal no es la Autoridad competente para conocer de esos datos, ya que sería potestad de las autoridades ambientales o en su caso de los órganos jurisdiccionales saber de ello, por lo que se **instruye** a la UTAG a que oriente al particular, a que redirija su solicitud directamente a esas instancias.

D.2. Folio 1700100012717 – Centro de Evaluación de Control y Confianza

Contenido de la Solicitud:

""Solicito la siguiente información

1. Cantidad de denuncias recibidas en los últimos dos años (enero 2016 a la fecha)
2. Los tres delitos más denunciados en los últimos dos años (de enero 2016 a la fecha)
3. Cantidad de psicólogas y psicólogos contratados y nombre de los departamentos o áreas a los que se encuentran adscritos y adscritas
4. Funciones específicas que realizan psicólogas y psicólogos según el área o departamento
5. Cantidad de peritajes en materia de psicología solicitados en los últimos dos años (enero 2016 a la fecha)” (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM.

PGR/CT/ACDO/0024/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, el Comité de Transparencia por unanimidad, **declara** y **confirma** la incompetencia para proporcionar la información de los puntos 1, 4 y 5 de la solicitud, en razón de que la autoridad competente para conocer de ello es directamente la Procuraduría General de la República, por lo que se instruye a la UTAG a que oriente al particular a redirigir su solicitud a esa instancia.

E. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

PGR/CT/ACDO/0025/2018: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar, en cada caso la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios:

- E.1. Folio 0001700333317
E.2. Folio 0001700333417
E.3. Folio 0001700333517
E.4. Folio 0001700334317
E.5. Folio 0001700334517
E.6. Folio 0001700334717
E.7. Folio 0001700335017

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

F. Respuestas a solicitudes de información en las que se analizan los cumplimientos a las resoluciones del INAI:

F.1. Folio 0001700161317 – RRA 5100/17

F.2. Folio 0001700205717 – RRA 5618/17

Las resoluciones adoptadas por unanimidad de los miembros del Comité se encuentran al final de la presente acta. - - - - -

G. Clasificación de la información de las Obligaciones de Transparencia comunes del Artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Derivado de la actualización trimestral señalada para algunas de las fracciones del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Procuraduría General de República a través de este Órgano Colegiado procederá a clasificar la información conforme a lo siguiente:

Respeto a las siguientes fracciones:

Fracción II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Fracción VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

Fracción VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

Fracción X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

Fracción XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

Fracción XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto de la información relacionada del personal sustantivo y el estado de fuerza del mismo y que se encuentran relacionados con las fracciones II, VII, VIII, X, XIV y XVII; con fundamento en el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP, correspondiente a la actualización de las obligaciones del SIPOT, hasta por un periodo de cinco años.

**Pruebas de daño para las fracciones II, VII, VIII, X, XIV y XVII
del artículo 70 de la LGTAIP.**

Artículo 110, fracción I:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable el hacer del dominio público la información citada en las fracciones que nos ocupan, ya que implicaría revelar el estado de fuerza al proporcionar el número y categoría de los servidores públicos que laboran en él, y causaría un grave perjuicio a las actividades de investigación y persecución de los delitos, propias de esta Institución encargada de la Seguridad Pública, toda vez que se difundiría la capacidad de reacción con la que se cuenta para combatir a la delincuencia, propiciando que miembros de ésta conozcan datos que les permitan obstruir o evadir las técnicas y estrategias de investigación llevadas a cabo en la persecución de los delitos.
- II. El riesgo de perjuicio que supone la publicidad de dicha información, supera el interés público de que se difunda, toda vez que atentaría directamente en las labores para el combate a la delincuencia, poniendo en peligro las actividades de investigación y persecución de los delitos. Por lo anterior, resulta de mayor importancia para la sociedad el que se garantice el derecho a la Seguridad Pública, sobre el interés particular de conocer información sobre el Estado de Fuerza de la Procuraduría General de la República.
- III. La reserva de la información se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se invoca con el propósito de evitar un perjuicio a la capacidad de reacción, a través de la protección de la información relacionada con el estado de fuerza de esta institución Federal, que se encarga de auxiliar al Ministerio Público de la Federación encargado de las actividades de investigación y persecución de los delitos.

Artículo 110, fracción V:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, la publicidad de la información relacionada con los servidores públicos de carácter sustantivo adscritos a esta Institución Federal, ya que los haría vulnerables poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad física, así como la de sus familiares, ya que serían identificados por miembros de la delincuencia organizada, con el propósito de obstaculizar, dificultar e impedir las funciones de investigación y persecución de los delitos que les fueron encomendadas.
- II. Es un riesgo de perjuicio ya que la divulgación de la información implica dar a conocer de manera puntual el estado de fuerza con que cuenta esta Representación Social, haciendo identificable a los servidores públicos que laboran en el mismo, resultando blancos fáciles para la delincuencia organizada y por tanto, no solo se pone en riesgo la vida e integridad física de los mismos, sino también ponen en riesgo las actividades de este Centro tendientes a coadyuvar en la investigación y análisis del fenómeno de la delincuencia, toda vez que, al ser reconocidos por miembros de la delincuencia organizada, podrían ser sujetos de chantajes, amenazas o cualquier otro tipo de coerción con la finalidad de que proporcionen información sensible que podría menoscabar las actividades tendientes a coadyuvar en la investigación y análisis del

fenómeno de la delincuencia, lo que se traduce en un perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada, no sólo salvaguarda las funciones que realizan los servidores públicos adscritos a esta Institución, sino también se protege su identificación y localización para no poner en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

2



Fracción IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente;

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto al nombre de los servidores públicos que realizan actividades sustantivas y área de adscripción de los mismos, así como, la denominación, tipo de viaje, origen, destino, motivo, periodo, fecha de informe e informe de la comisiones que éstos realizan; además, del origen y destino de los gastos de representación; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de 5 años.

Prueba de daño para la fracción IX de la LGTAIP.

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable el difundir la información relativa a las comisiones y lugares de destino del personal que realiza actividades sustantivas, ya que se proporcionarían elementos que los harían identificables, poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza y la de sus familiares por estar vinculados con el servidor público, tomando en consideración que las actividades que realizan son meramente de investigación y/o acreditación del cuerpo del delito de diversos delitos del orden federal vinculadas con la delincuencia.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al permitir que se identifique al personal sustantivo que se desempeña como servidor público con funciones de investigación, se pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad física, aunado a que el hecho de que personas con pretensiones delictivas pudieran promover algún vínculo o relación directa con dicho servidor público, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a la persona o personas que requieran consultar esta información en el sistema nacional de transparencia, y en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración que esta Institución debe cumplir con la sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo de su personal sustantivo no sería viable hacerla pública.
- III. En cuanto a principio de proporcionalidad, el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la institución, como es el caso del nombre, área de adscripción, fecha de ingreso, o egreso, rotación, comisiones, lugares de destino, etc., no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de dichos funcionarios que realizan tareas de carácter sustantivo que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales.

➤ **Persona física (datos personales)**

Fracción XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de confidencialidad respecto de los datos personales de los servidores públicos que pudieran estar inmiscuidos en esta fracción, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, correspondiente la actualización de las obligaciones del SIPOT.

Son clasificados como confidenciales los datos personales, de acuerdo al artículo 113, fracción I de la LFTAIIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene *datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable*:

$$\overline{[...]}$$

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad** alguna y **sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)**"

(Énfasis añadido).

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Fracción XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

➤ ***Seguridad Nacional y Riesgo a la vida, seguridad e integridad***

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto de la información relacionada con contratos de seguridad nacional y/o cuyo objeto pudiera poner en riesgo la vida, integridad y seguridad del personal sustantivo; con fundamento en el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, correspondiente a la actualización de las obligaciones del SIPOT, por lo que se describen las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I de la LFTAIP:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que de divulgar la información relacionada a con concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, etc, obstaculizaría las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- I. Se supera el interés público general de conocer la información, toda vez que al divulgarla permitiría que las organizaciones criminales pudieran aprovecharla para vulnerar la capacidad de las investigaciones y combate frontal a la delincuencia organizada que lleva a cabo el sujeto obligado, puesto que dan cuenta de las especificaciones que se llevan a cabo sobre el almacenamiento, clasificación y administración de información de inteligencia de la Institución.
- II. El proteger la información se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de esta Procuraduría General de la República, dificultando las estrategias para la investigación y persecución de los delitos en contra de la delincuencia organizada.

Artículo 110, fracción V de la LFTAIP:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

- II. Asimismo, derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Adicionalmente, atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales

➤ **Persona física (datos personales)**

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de confidencialidad respecto de la información relacionada con contratos en los que el contratado es una persona física; con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Son clasificados como confidenciales los datos personales, de acuerdo al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene *datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable*

[...]

La información confidencial *no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)*

(Énfasis añadido).

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

➤ **Prevención y persecución de los delitos**

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto de la información relacionada con contratos en los que de revelarse el objeto o algún otro elemento de los requeridos en el formato Excel del SIPOT pudiera obstruir la prevención y/o persecución de los delitos; con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable, ya que con la entrega de la documentación solicitada, se hace pública información que contiene especificaciones y modos de operación de los instrumentos utilizados por el Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de delitos, a través de la integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación en integración, datos que de caer en manos de los integrantes de los grupos criminales, serían utilizados para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsable de la comisión de un ilícito.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada por parte del Ministerio Público de la Federación, se ubica por encima de la entrega de la información requerida.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, la clasificación reserva de la información solicitada es directamente proporcional al derecho de la reparación del daño de las víctimas de la delincuencia organizada, de su derecho a la verdad, de su derecho a la justicia, y de su derecho a la reparación del daño.

Fracción XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente;

➤ ***Seguridad Nacional y Riesgo a la vida, seguridad e integridad***

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto de la información relacionada con contratos de seguridad nacional y/o cuyo objeto pudiera poner en riesgo la vida, integridad y seguridad del personal sustantivo; con fundamento en el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, correspondiente la actualización de las obligaciones del SIPOT.

Artículo 110, fracción I de la LFTAIP:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que de divulgar la información relacionada a con concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, etcétera, obstaculizaría las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- II. Se supera el interés público general de conocer la información, toda vez que al divulgarla permitiría que las organizaciones criminales pudieran aprovecharla para vulnerar la capacidad de las investigaciones y combate frontal a la delincuencia organizada que lleva a cabo el sujeto obligado, puesto que dan cuenta de las especificaciones que se llevan a cabo sobre el almacenamiento, clasificación y administración de información de inteligencia de la Institución.
- III. El proteger la información se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de esta Procuraduría General de la República, dificultando las estrategias para la investigación y persecución de los delitos en contra de la delincuencia organizada.

Artículo 110, fracción V de la LFTAIP:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

- II. Asimismo, derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Adicionalmente, atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales

➤ **Persona física (datos personales)**

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de confidencialidad respecto de la información relacionada con contratos en los que el contratado es una persona física; con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Son clasificados como confidenciales los datos personales, de acuerdo al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene *datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable*:

[...]

La información confidencial *no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)*

(Énfasis añadido).

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Fracción XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

➤ ***Seguridad Nacional y Riesgo a la vida, seguridad e integridad***

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto de la información relacionada con el padrón de proveedores y contratistas seguridad nacional y/o cuyo objeto pudiera poner en riesgo la vida, integridad y seguridad de los proveedores y contratistas; con fundamento en el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, correspondiente a la actualización de las obligaciones del SIPOT.

Artículo 110, fracción I de la LFTAIP:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que de divulgar la información relacionada con el padrón de proveedores y contratistas, obstaculizaría las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene los datos de las personas que proveen de las herramientas utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- II. Se supera el interés público general de conocer la información, toda vez que al divulgarla permitiría que las organizaciones criminales pudieran aprovecharla para vulnerar la capacidad de las investigaciones y combate frontal a la delincuencia organizada que lleva a cabo el sujeto obligado, puesto que dan cuenta de las especificaciones que se llevan a cabo sobre el almacenamiento, clasificación y administración de información de inteligencia de la Institución.
- III. El proteger la información se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de esta Procuraduría General de la República, dificultando las estrategias para la investigación y persecución de los delitos en contra de la delincuencia organizada.

Artículo 110, fracción V de la LFTAIP:

- I. Divulgar información perteneciente a los proveedores y contratistas de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por las relaciones contractuales que tenga con la institución las cuales se encuentran estrechamente vinculadas con la prevención y persecución de los delitos federales, permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Asimismo, derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el

divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían identificar y localizar a los proveedores y contratistas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

- III. Adicionalmente, atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de proveedores y contratistas, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichas personas, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales

➤ **Persona física (datos personales)**

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de confidencialidad respecto de la información relacionada con el padrón de proveedores y contratistas en los que el padrón o proveedor es una persona física; con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Son clasificados como confidenciales los datos personales, de acuerdo al artículo 113, fracción I de la LFTAIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)"

(Énfasis añadido).

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Fracción XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva respecto de la información relacionada con el inventario toda vez que revelaría el estado de fuerza del personal sustantivo de la Institución; con fundamento en el artículo 110, fracciones I y V de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

Bienes muebles:

- I. Difundir la información relativa al contenido de los bienes utilizados para funciones sustantivas y el dar a conocer las características de los mismos, vulnera la seguridad y capacidad con la que cuenta la Procuraduría General de la República para las funciones encomendadas, de igual manera pone en riesgo las operaciones en la que se encuentran destinados, por lo que vulnera la seguridad, poniendo en riesgo tanto las comisiones como la vida de los servidores públicos a quienes se les designan; toda vez que se proporcionarían elementos que lo hacen identificable, poniendo en riesgo su vida, las funciones y actuaciones de seguridad que realiza y por ende la de sus familiares por estar vinculados con el servidor público, tomando en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Título I México en Paz, numeral 1.2 denominado Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz, se hace alusión a que: *"Para garantizar la Seguridad Nacional se requiere una política que identifique y prevenga la actualización de fenómenos que pretendan atentar contra los intereses estratégicos nacionales; que fortalezca la generación de inteligencia; que promueva esquemas de cooperación y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales; y que garantice un equipamiento, una infraestructura y un marco legal que responda a las amenazas que enfrenta el país"*, es así que las actividades que principalmente se realizan son meramente de investigación a acreditación del cuerpo del delito de diversos actos ilícitos del orden federal vinculados con los grupos delincuenciales del país.
- II. Al permitir que se identifique las características de dichos bienes con los que cuenta esta Institución y al darlos a conocer, pone en riesgo la capacidad de respuesta con la que cuenta esta Procuraduría, para la atención de las tareas encomendadas que se realizan en cumplimiento de sus funciones, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general, por lo que tomando en consideración lo señalado en el apartado denominado Fortaleza Institucional para un México en Paz, en la Introducción y visión general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que señala que las instituciones de seguridad del país deben tener como fin prioritario garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos.
- III. El reservar dicha información, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de los funcionarios que realizan tareas de

carácter sustantivo que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales, además de que se respeta en todo momento lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es así que en concordancia con el mismo se señala que: "La construcción de un México en Paz exige garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Tanto las fuerzas de seguridad, las instancias que participan en el Sistema de Justicia, así como el resto de las autoridades, deben ajustar su manera de actuar para garantizar el respeto a los derechos humanos. Esto incluye implementar políticas para la atención a víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos, así como promover medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, además de garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno", situación que al reservar el presente no se afecta y al contrario se protege a los servidores públicos y sus familias que como lo dictan los tratados internacionales en materia de derechos humanos se debe privilegiar la vida de los ciudadanos.

Bienes inmuebles:

- I. Difundir la información relativa a la ubicación de las diferentes áreas de las oficinas de los funcionarios de alto nivel, así como las vías de acceso al inmueble, potencializaría una amenaza destinada a entorpecer o dilatar las funciones de procuración de justicia, acciones tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura, lo anterior en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Título I. México en Paz, numeral 1.2 denominado Plan de acción: Fortalecer al Estado y garantizar la paz, el cual hace alusión a que: *"Para garantizar la Seguridad Nacional se requiere una política que identifique y prevenga la actualización de fenómenos que pretendan atacar contra los intereses estratégicos nacionales; que fortalezca la generación de inteligencia; que promueva esquemas de cooperación y coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales; y que garantice un equipamiento una infraestructura y un marco legal que responda a las amenazas que enfrenta el país."*, es así que en los inmuebles en donde se llevaron a cabo trabajos, cuentan con instalaciones especiales y equipo que son de Seguridad Nacional, por lo que no procede dar a conocer sus especificaciones y características.
- II. Al permitir que se identifiquen los inmuebles destinados a esta Procuraduría General de la República, pone en riesgo la capacidad de respuesta con la que cuenta esta Procuraduría, para la atención de las tareas encomendadas que se realizan en cumplimiento de sus funciones, hecho que se traduciría en un detrimento al combate a la delincuencia en perjuicio de la seguridad pública vulnerando el interés social y general, ya que el beneficio se limita única y exclusivamente al solicitante en donde en todo caso, prevalece el interés particular sobre el interés público, por lo que tomando en consideración lo señalado en el apartado denominado Fortalecimiento Institucional para

un México en Paz, en la introducción y visión general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que señala que: *"las instituciones de seguridad del país deben de tener como fin prioritario garantizar la integridad física de la población. México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes en términos de seguridad pública. La falta de seguridad genera un alto costo social y humano, ya que atenta contra la tranquilidad de los ciudadanos. Asimismo, esta carencia incide en el potencial de desarrollo nacional, inhibiendo la inversión de largo plazo en el país y reduciendo la eficiencia operativa de las empresas"*, esta Institución debe cumplir con la sociedad, con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos a cargo de su personal sustantivo.

- III. El reservar información relativa a la ubicación de los inmuebles, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud de que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la salud y la seguridad como bien jurídico tutelado de los funcionarios que realizan tareas de carácter sustantivo que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de diversas Leyes y Tratados Internacionales, además de que se respeta en todo momento lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, es así que en concordancia con el mismo se señala que: *"La construcción de un México en Paz exige garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Tanto las fuerzas de seguridad, las instancias que participan en el Sistema de Justicia, así como el resto de las autoridades, deben ajustar su manera de actuar para garantizar el respeto a los derechos humanos. Esto incluye implementar políticas para atención a víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos, así como promover medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, además de garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno"*, situación que al reservar la información no se afecta y al contrario se protege a los servidores públicos y sus familias que, como lo dictan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, se debe privilegiar la vida de los ciudadanos, así como de las personas que se encuentran en el inmueble, pudiendo ser testigos, visitantes, etc.

Fracción XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

➤ **Persona física (datos personales)**

El Comité de Transparencia **confirma** la clasificación de confidencialidad respecto de la información relacionada con las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio cuando contengan datos de personas físicas; con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Son clasificados como confidenciales los datos personales, de acuerdo al artículo 113, fracción I de la LFTAIIP, mismo que para su mejor observancia se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene *datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable*:

[...]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)

(Énfasis añadido).

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

H. Cambios en la Tabla de Aplicabilidad SIPOT

La Oficialía Mayor sometió a consideración del Comité de Transparencia, la modificación de la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia en lo relacionado a las fracciones IX, XVII, XXVII, XXVIII y XXXII, del artículo 70 de la LGTAIP, las cuales se encuentran originalmente asignadas a dicha unidad responsable, argumentando que las Delegaciones Estatales en su calidad de órganos desconcentrados¹ se encuentran debidamente facultadas para ejercer su presupuesto y atender sus servicios administrativos.

La solicitud de modificación, radica en lo siguiente:

- ♦ A la Oficialía Mayor, le corresponderían las fracciones IX, XVII, XXVII, XXVIII y XXXII (únicamente sector central), del citado artículo 70 de la LGTAIP.
- ♦ A las Delegaciones de la SCRPPA, les corresponderían las fracciones IX, XVII, XXVII, XXVIII y XXXII, en su respectivo ámbito de competencia, del citado artículo 70 de la LGTAIP.

Por lo anterior, previo a que el Comité de Transparencia se pronuncie sobre la solicitud de modificación de la Tabla de Aplicabilidad correspondiente, se da vista con la misma al enlace de transparencia de SCRPPA, para que emita un pronunciamiento fundado y motivado respecto a la propuesta de la OM.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

¹ Con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 12 y 102 de su Reglamento y, Lineamiento Décimo, fracciones III y IV de los *Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Título Quinto fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia.*

Siendo las 13:24 horas del mismo día, se dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria del año 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



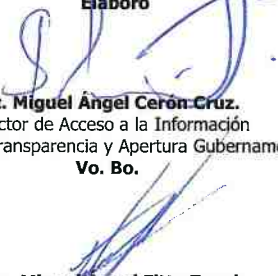
Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



Lic. Miguel Ángel Fitta Zavala.
Director de Capacitación y Protección de Datos Personales
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

F. Análisis al cumplimiento de las resoluciones del INAI.

F.1. Folio 0001700161317 – RRA 5100/17

Contenido de la Solicitud: "Se solicita versión pública de *TODOS* los contratos celebrados entre la dependencia y las siguientes empresas:

1. BALAM SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.
2. BLINDADO SEGURO S.A. DE C.V.
3. BSD SECURITY SYSTEMS, S.A. DE C.V.
4. CELLEBRITE MOBILE SYNCHRONIZATION
5. COBHAM DEFENSE ELECTRONIC SYSTEMS
6. DXTX CORP.
7. DYNAMIC TRADING EXCHANGE TECHNOLOGIES CORPORATIVO MÉXICO, S. DE R.L.
8. ELITE BY CARGA S.A DE CV.
9. EYE TECH SOLUTIONS S.A. DE C.V.
10. GAMMA GROUP INTERNATIONAL LTD
11. GAMMA INTERNATIONAL GMBH
12. GESECO S.A. DE C.V.
13. GRUPO TECH BULL S.A. DE C.V.
14. HT S.R.L.
15. NEOLINX DE MÉXICO S.A. DE C.V.
16. OBSES DE MÉXICO S.A. DE C.V.
17. PICORP DE MÉXICO S.A. DE C.V.
18. SECURITY TRACKING DEVICES S.A. DE C.V.
19. SEGURIDAD EN LA NUBE S.A. DE C.V.
20. SEGURIDAD PRIVADA GRUPO ARMOR, S.A. DE C.V.
21. SEGURITECH SA DE CV
22. SEGURITECH PRIVADA S.A.
23. SYM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.
24. TEVA TECH DE MÉXICO S.A. DE C.V.
25. TI ELITE TACTICAL S.A. DE C.V.
26. VERINT SYSTEMS INC.

Gracias." (Sic)

El pasado 1 de agosto de 2017, el solicitante se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, alegando que este sujeto obligado no responde a lo pedido en su solicitud de información, debido a que la información de algunos contratos fueron clasificados como reservados en su totalidad.

Por lo que, con fecha 7 de diciembre de 2017 el INAI notificó la resolución correspondiente al recurso RRA – 5100/17, a través de la cual resolvió **MODIFICAR** la respuesta otorgada, de conformidad con el artículo 151 y 157 fracción III, de *la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública* (LFTAIP) e instruyó lo siguiente:

"...Entregue al particular versión pública de los contratos que ese sujeto obligado celebró con las cuatro empresas previstas en la solicitud en donde únicamente se proteja la información que revele lo siguiente:

a) Procedimientos, métodos, especificaciones técnicas, tecnología y/o equipo que se utilizan para la generación de inteligencia, empleados por el sujeto obligado para salvaguardar la seguridad nacional; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Décimo Séptimo, fracción IV de los Lineamientos Generales.

b) Los nombres de aquellas personas físicas (sean servidores públicos o particulares) que participaron y tienen conocimiento privilegiado, concreto y específico sobre procedimientos, métodos, especificaciones técnicas, tecnología y/o equipo que se utilizan para la generación de inteligencia, empleados por el sujeto obligado para salvaguardar la seguridad nacional; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales.

Cabe destacar que, en dichas versiones públicas, el sujeto obligado no podrá clasificar aquellos datos que debe publicar como obligaciones de transparencia, de conformidad con el artículo 70, fracción XXVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tales como el objeto, nombre o razón social del proveedor, vigencia, tipo, términos, condiciones y monto. Así como lo previsto, en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo que resulte aplicable.

Igualmente, deberá proporcionar al solicitante, la resolución debidamente signada por los integrantes del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República en donde, con fundamento en el artículo 140 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se confirme la clasificación, en los términos especificados, por un plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 157, párrafo segundo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Instituto verificará las versiones públicas elaboradas por el sujeto obligado, previo a la entrega al recurrente.

Para efectos de su cumplimiento y toda vez que en la solicitud de acceso se señaló como modalidad preferente "Entrega por Internet en la Plataforma Nacional de Transparencia" y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá enviar la información correspondiente, al correo electrónico que proporcionó o ponerla a su disposición en un sitio de Internet y comunicarle los datos que le permitan acceder a la misma..."

[Sic.]

(Énfasis añadido).

Por lo que, a fin de dar cumplimiento a la citada instrucción, se realizaron las diversas gestiones para cumplimentar la determinación del Órgano Garante en Materia de Transparencia, con el CENAPI, PFM y la OM, en coordinación con la UTAG, por lo que revisaron los proyectos de versiones públicas de los instrumentos contractuales celebrados con las personas morales BALAM SEGURIDAD PRIVADA, VERINT, GRUPO TECH BULL Y GESECO.

No omitiendo mencionar, que las mismas cuentan con el visto bueno de la Coordinación de Asesores del C. Procurador.

RESOLUCIÓN PGR/CT/002/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II y 169 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los contratos celebrados con las empresas morales: Balam Seguridad Privada, Verint, Grupo Tech Bull y GESECO, testando y clasificando la siguiente información que actualiza las causales de reserva previstas en el artículo 110, fracción I y V de la LFTAIP, mismas que se describen a continuación:

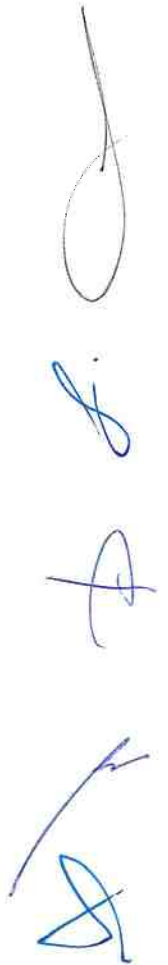
Artículo 110, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Décimo Séptimo, fracción IV de los Lineamientos Generales.

- a) Procedimientos,
- b) métodos,
- c) especificaciones técnicas,
- d) tecnología y/o equipo que se utilizan para la generación de inteligencia,
- e) empleados por el sujeto obligado para salvaguardar la seguridad nacional.

Asimismo, toda vez que no es suficiente que la información esté directamente relacionada con causales previstas en el artículo 110 de la LFTAIP, sino que es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, se procede a otorgar la misma:

Artículo 110, fracción I:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la documentación requerida, obstaculiza las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que con la entrega de la documentación peticionada, se obstaculiza el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición información de inteligencia y contrainteligencia generada para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, que revela las estrategias y capacidades de esta Procuraduría General de la República, utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y así verse afectada la Seguridad Pública y Nacional,



traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el clasificar la información solicitada se traduce en la salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la Seguridad Pública y Nacional a través de la investigación y persecución de los delitos, encomienda del Ministerio Público de la Federación. Por lo que resulta de mayor relevancia para la sociedad que esta Procuraduría General de la República vele por la Seguridad Pública y Nacional a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información relativa a las técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.

Artículo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación al Vigésimo Tercero de los Lineamientos Generales.

Los nombres de aquellas personas físicas (sean servidores públicos o particulares) que participaron y tienen conocimiento privilegiado, concreto y específico sobre procedimientos, métodos, especificaciones técnicas, tecnología y/o equipo que se utilizan para la generación de inteligencia, empleados por el sujeto obligado para salvaguardar la seguridad nacional.

Asimismo, toda vez que no es suficiente que la información esté directamente relacionada con causales previstas en el artículo 110 de la LFTAIP, sino que es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, se procede a otorgar la misma:

Artículo 110, fracción V:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, el dar a conocer datos sobre las personas involucradas en los instrumentos contractuales de referencia, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, incluso las de sus familiares, toda vez que con la publicidad de dichos datos se harían identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones, intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información sensible de inteligencia y contrainteligencia utilizada en contra de la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que el divulgar datos de las personas que participaron en los procedimientos de contratación, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, toda vez que serían sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional y Pública, o simplemente ser blanco de represalias ya que la

La presente resolución forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 16 de enero del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

RESOLUCIÓN

F. Análisis al cumplimiento de las resoluciones del INAI.

F.2. Folio 0001700205717 – RRA 5618/17

Contenido de la Solicitud: *"En referencia a mi solicitud con número de folio: 0001700011715, solicito la actualización de la cifra sobre cuántas denuncias se han interpuesto ante esta Procuraduría por el delito de tortura. Esto lo requiero desagregado por año, de 2006 a 2016"* (Sic)

El pasado 25 de agosto de 2017, el solicitante se inconformó ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con motivo de la respuesta otorgada por esta dependencia a su solicitud, en razón de que se le otorgó información de averiguaciones previas y carpetas de investigación, no así de "denuncias", tal y como lo solicitó el particular.

Por lo que, con fecha 8 de diciembre de 2017 el INAI notificó la resolución correspondiente al recurso RRA – 5618/17, a través de la cual resolvió **MODIFICAR** la respuesta otorgada, de conformidad con los artículos 151 y 157 fracción III, de la *Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP)* e instruyó lo siguiente:

"...Con fundamento en el artículo 157, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resulta procedente modificar la respuesta del sujeto obligado, y se le instruye a efecto de que realice una nueva búsqueda exhaustiva del número de denuncias interpuestas ante el sujeto obligado por el delito de tortura, desagregado por año, del dos mil seis a dos mil dieciséis, en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales; la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional; la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo; la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, la Visitaduría General y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

En caso de no localizar la información deberá someter a consideración de su Comité de Transparencia la inexistencia, de conformidad con lo señalado en las fracciones I y II del artículo 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y entregará la resolución al particular..."

[Sic.]

Por lo que, a fin de dar cumplimiento a la citada instrucción, se turnó la solicitud a las siguientes áreas, las cuales informaron lo siguiente:

VG: Indicó que la información solicitada debe ser proporcionada por la COPLADII, por conducto de la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos (DGPPE), toda vez que la información requerida es de naturaleza estadística y que el Sistema Institucional de Información Estadística es el canal único para el flujo de dicha información relacionada directamente con las actuaciones de cada uno de los Agentes del Ministerio Público de la Federación.

SDHPDSC: Señaló que no cuenta con información al respecto y sugirió consultar a la COPLADII.

SCRPPA: Indicó que no cuenta con información al respecto, orientando a la COPLADII y a la SEIDF. Asimismo, manifestó que en principio de máxima publicidad obtuvo resultados negativos para localizar la información requerida por el particular, por lo que solicita al Comité de Transparencia declarar la inexistencia.

COPLADII: Reiteró su respuesta inicial, en la cual proporcionó información del número de averiguaciones previas (2006 a 2016) y carpetas de investigación (2014 a mayo de 2017), indicando entre otras cosas, que las unidades sustantivas encargadas de la investigación de actos posiblemente constitutivos de delito, solo registraban en el SIIE información a partir del Acuerdo de inicio de una averiguación previa y en la actualidad, en el sistema justici@.net en la apertura de una carpeta de investigación, situación por la cual esa unidad administrativa no cuenta con estadística de denuncias que no hayan dado origen a una investigación ministerial (averiguaciones previas o carpetas de investigación).

En este contexto, solicitó se ponga a consideración del Comité de Transparencia declarar la inexistencia de la información tal y como la solicita el peticionario, con fundamento en los artículos 65, fracción II y 141 fracción II de la LFTAIP.

SEIDF: Señaló que mediante acuerdo A/101/15 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2015 se creó la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Tortura, por lo que a partir de esa fecha cuenta con 2359 expedientes de averiguación previa iniciados, de las cuales hay 160 determinaciones y 2199 expedientes en trámite.

Y por lo que hace a carpetas de investigación, se iniciaron 1014: 422 fueron en 2016 y 592 en 2017, actualmente en trámite se encuentran 845 carpetas de investigación.


En ese sentido, dicha unidad indicó que el número de averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas y en trámite en esa Unidad Administrativa, se originan por una denuncia, es decir, por la noticia de algún acto ilícito, ya sea emitida por un particular, una autoridad jurisdiccional o por parte de un Agente del Ministerio Público de la Federación.

SEIDO: Indicó que cuenta con cero (0) registros de denuncias interpuestas por el delito de tortura.

Determinación del Comité de Transparencia

RESOLUCIÓN PGR/CT/003/2018: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II y 169 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia **declara y confirma** la inexistencia de la estadística del número de denuncias del delito de tortura en aquellas áreas que no la tienen con el nivel que requiere el particular, toda vez que, como se mostró con anterioridad, se agotaron todos los criterios de búsqueda exhaustiva dentro de las áreas competentes para conocer de lo requerido; lo anterior, con fundamento en el artículo 141, fracciones I y II de la LFTAIP.

Así también este Órgano Colegiado **instruye** a la UTAG para que proporcione la presente resolución al correo electrónico que el particular señaló como medio para oír y recibir notificaciones en el presente medio de impugnación.-----

[illegible]

La presente resolución forma parte del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 16 de enero del 2018 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia:

INTEGRANTES



Lcda. Adi Loza Barrera.
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.




Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y
Servicios Generales, responsable del Área Coordinadora
de Archivos de la Dependencia.



Lcda. Gabriela Santillán García.
Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.
Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.